



## Factores de la crisis de integración social

En este capítulo serán analizadas tres cuestiones vinculadas a la crisis de integración social por la que atraviesa la sociedad bonaerense actual: la Seguridad Humana, el aumento de la emigración de jóvenes hacia otras naciones y las dificultades existentes para operar una reforma política. En los tres casos se demuestra la pertinencia del enfoque multidimensional de la integración social expuesto en el capítulo precedente, que en buena medida se opone a la visión convencional con que suelen ser analizados. En este sentido, corresponde remarcar que el Desarrollo Humano implica una visión integral acerca de las capacidades de la comunidad, porque solamente con ella pueden enfrentarse con esperanzas de éxito los dilemas que desafían a las sociedades actuales.

### Seguridad Humana

La incapacidad colectiva para transformar la realidad se transforma en incertidumbre, inseguridad y desprotección, que a la vez se refuerzan en una espiral que impide formular y ejecutar acciones colectivas. Como afirma Zygmunt Bauman, “las personas que se sienten inseguras, las personas preocupadas por lo que puede deparar el futuro y que temen por su seguridad, no son verdaderamente libres para enfrentar los riesgos que exige una acción colectiva. Carecen del valor para intentarlo y del tiempo necesario para imaginar alternativas de convivencia”.

El Informe sobre Desarrollo Humano en la Provincia de Buenos Aires 1998 se centró en los desafíos de la Seguridad Humana. Allí se analizaron las diferentes perspectivas del concepto y la pertinencia de dos causas de la creciente percepción de inseguridad: el aumento local y global de la desigualdad y la crisis de imagen del futuro, es decir, la decadencia de la idea de que el futuro

necesariamente será mejor que el presente y que el pasado.

El dispositivo que dio fundamento al mito del progreso siempre ha sido propulsado y lubricado con promesas utópicas. Hoy existe un mito hegemónico que se presenta como “antiutopía”, criticando la ingenuidad utópica y las consecuencias que la misma ha acarreado, argumentando como si la única construcción social consciente de la humanidad hubieran sido las dictaduras soviéticas. Evidentemente, ya no es posible pensar que “de la tierra al cielo parece existir una escalera y el problema es encontrarla”. En buena medida, se han dejado de lado aquellas grandes teorías con visiones de un proceso histórico encaminado inevitablemente en una dirección determinada, hacia un progreso que se suponía comprobable positivamente. Pero ello no puede llevar a afirmar que la única forma de construir una sociedad buena es “dejándola en manos del anonimato de las fuerzas del mercado”, supuestamente no estructuradas por ningún poder concentrado ni interés particular. Semejante anonimato implica glorificar la resignación, pues “es difícil reformar una sociedad cuando no se tienen más que sacrificios para pedirle y un objetivo vago para proponerle”. En cambio, un proyecto colectivo de transformación contagia esperanza y por tanto reasigna capacidades para importantes sectores de la comunidad, cuya convicción a la vez se transmite a sus propios autores. Ello permitirá desterrar la anomia que produce desintegración y violencia, calificada por Robert Castel como “una violencia casi siempre sin proyecto, devastadora y autodestructiva a la vez, y tanto más difícil de controlar cuanto que no tiene nada para negociar”.

Las instituciones estatales inhiben la Seguridad Humana cuando se concentran exclusivamente en la seguridad pública, dejando de lado otras formas de incertidumbre y desprotección. Eso ocurre aun en las naciones más ricas del planeta. Por

ejemplo, en Texas (Estados Unidos), los tres candidatos a gobernador usaron el tiempo de oratoria de la convención del partido para explicar la calidad de sus servicios en favor de la pena de muerte: Ann Richards, la ganadora, mostró un fervor inigualable en favor de su aplicación; Mark White posó ante las cámaras de televisión rodeado de fotos de los convictos que habían sido condenados a la silla eléctrica durante su gobernación; y Jim Mattox afirmó que personalmente había supervisado 33 ejecuciones. En casi todo Estados Unidos –y en menor medida en muchos otros países de Europa–, el primer tema de los programas electorales es el de aumentar el número de criminales condenados a pena de muerte, verificable en los candidatos de las diferentes extracciones partidarias e ideológicas. El argumento principal es que “no hay que respetar la vida de quien no respeta la vida”, sin parar a considerar que el principio se puede invertir, y difícilmente se puede convencer a todos que se debe respetar la vida cuando las mismas personas “respetables” no la elevan como principio incondicional. Hace más de 80 años, el sociólogo alemán Max Weber había tratado de demostrar que un Estado puede ejercer la coerción porque es legítimo, pero a la vez “es impensable que un Estado pueda legitimarse a través de la coerción”. La elemental conjetura que predomina en ciertos discursos actuales parece suponer que existen unos pocos inadaptables que al delinquir reniegan de su naturaleza humana, y que por ello mismo su humanidad no puede ser respetada. Sin embargo, ello implica negar la realidad de que esos supuestamente pocos inadaptables reflejan las miserias de una cultura hegemónica que cada vez brinda menos importancia a la violencia y a la muerte. Al igual que en los estadios de fútbol, no suele haber sólo diez ni cien “inadaptables de siempre”, sino 30.000 respetables vociferantes que incitan abiertamente a la violencia y la festejan cuando se produce. Detrás de los delitos contra las personas existe un trasfondo cultural que va restando importancia a la vida humana en todos los estratos sociales. En los discursos que reclaman mayor represión falta aclarar explícitamente si el modelo al que se quiere llegar es el de Estados Unidos, donde el aumento de la población carcelaria disminuye fuertemente la tasa de desocupación de los grupos étnicos minoritarios y genera la actividad con mayor crecimiento de toda la economía en los últimos años.

El mundo ideal para esta forma de concebir la seguridad es el de las grandes fortalezas rodeadas de tinieblas. Bauman afirma que “los solitarios asustados, sin comunidad, seguirán buscando una comunidad sin miedos, y los que están a cargo del inhospitalario espacio público seguirán prometiéndola. El problema es que las únicas comunidades que pueden construir los solitarios, y que los administradores del espacio público pueden ofrecer si son serios y responsables, son aquellas construidas a partir del miedo, la sospecha y el odio”. La dispersión del disenso y la dificultad de anclarlo en una causa común empeora los sufrimientos que lo habían producido. En ese contexto, la única forma de recuperar la solidaridad sería identificando un enemigo común hacia el cual orientar tal cantidad de humillaciones que le permita recibir legítimamente todas las atrocidades que le sean dirigidas.

Casi todas las medidas instrumentales tomadas para promover la seguridad pública tienden a dividir a las personas, “siembran la suspicacia mutua, separan a la gente, la inducen a suponer conspiradores y enemigos”, es decir, limitan la integración social sembrando la alienación y la anomia, e incluso vulnerando los derechos civiles y económicos de aquellos cuya única culpa consiste en residir en barrios donde también habitan delincuentes comunes –suponiendo que sólo cometen delitos quienes residen en determinados barrios. Además, “aunque esas medidas están muy lejos de dar en el centro de la verdadera fuente de angustia, sin embargo consumen toda la energía que esa fuente genera, energía que podría emplearse más eficazmente si se la canalizara en el esfuerzo de devolver el poder al espacio público gobernado por la política”. Esto explica en parte la escasez de demanda de espacios públicos, además de la falta de importancia de todo lo que ocurre en ellos. Por eso, “el verdadero poder siempre permanecerá a una distancia segura de la política, y la política será impotente para hacer lo que se espera de ella”.

Las tres dimensiones de la Seguridad Humana –socioeconómica, ambiental y pública– se encuentran afectadas por la integración social: posesión, pertenencia y participación son fuentes de certidumbre, y a la vez permiten a las instituciones estatales y de la comunidad intervenir eficazmente para reducir la desigualdad y sus conse-

cuencias. Por eso la Seguridad Humana y aun la libertad individual sólo pueden ser producto del trabajo colectivo, pueden solamente conseguirse y garantizarse colectivamente, pues exigen el compromiso y la responsabilidad de todos los actores, pero además requieren de la participación en un debate público y abierto en que se puede llegar a acuerdos favorables y también desfavorables. Refiriéndose a estas y otras formas de incoherencia entre los valores declamados y la pretensión de intangibilidad de las propias libertades, Zygmunt Bauman afirma que “tendemos a enorgullecernos de lo que quizá deberíamos avergonzarnos”. Si no se recurre a la acción política y a la afirmación de principios de bien público, no se podrá conseguir “que la mosca de la inseguridad se desprenda de la miel de libertad individual”.

La incertidumbre también invade la vida laboral, bajo el nombre de la flexibilidad. En palabras sencillas, ‘flexibilidad’ significa que todos los trabajadores son reemplazables, que todas las actividades económicas pueden cesar por variaciones drásticas de las condiciones de mercado o apenas el “inversor” estima que existe otra área que ofrece una mayor rentabilidad o un menor riesgo. Puede verse claramente que en momentos de aumento del desempleo las personas comienzan a retraer sus proyectos de largo plazo, pero incluso en los casos en que toman créditos como una forma de capitalizarse se tornan mucho más complacientes con las condiciones de trabajo. Queda entonces enterrada la tradicional estrategia de invertir tiempo y esfuerzo en la capacitación para acceder a una carrera laboral digna. El peso de la capacitación pierde relevancia en favor de las relaciones personales, y hoy crecientemente la estrategia más eficaz consiste en fabricar y preservar relaciones que permitan abrir nuevas oportunidades laborales. Esto significa por un lado libertad de opción para muchas personas, pues así se libran de la aplastante rutina de una carrera profesional típica, pero implica una limitación insoluble para muchas más, porque no provienen de sectores sociales con quienes resulta provechoso establecer relaciones. A esto debe agregarse que la economía de servicios, al ser mucho más cara—a—cara que la economía agropecuaria o industrial, sesga claramente en favor de quienes cumplen con los requisitos hoy prescritos por la cultura dominante: joven, lindo, de buena presencia —léase: de buena familia.

Existe otra forma de incertidumbre que trasciende la seguridad pública: la de las relaciones de confianza entre las personas, en los vínculos sociales, laborales, familiares y afectivos, e incluso en los compromisos propios del espacio público, como pueden ser la actividad política o los acuerdos entre actores sociales. La falta de certeza acerca del comportamiento de los otros, respecto a las compañías o las asociaciones aun más pequeñas, lleva a que la conducta racional consista en eludir las relaciones de las que no se pueda desvincular libremente cuando los lazos contruidos dejen de ser útiles y deseables. Se trata de una racionalidad instrumental que impide la formación de comunidades seguras y duraderas: “sus elecciones racionales los convertirían en cómplices inocentes y sin premeditación en la fabricación de la misma inseguridad del mundo en que viven, que hace del rechazo de los puertos seguros una cuestión de elección racional. La inseguridad ha alcanzado un punto en el que puede jactarse de haber reclutado las facultades racionales de los individuos en carácter de sirvientes fieles y confiables”. Como afirma Anthony Giddens, la incertidumbre es fabricada porque los intentos destinados a repararla la refuerzan: estar en crisis ya no se considera como el resultado de una derrota, sino como el atributo inseparable de la condición humana. Se haga lo que se haga, siempre se está en riesgo.

En ausencia de un sentimiento de fraternidad que imponga el cumplimiento de normas morales más allá de las consideraciones de utilidad, la incertidumbre genera alienación e impotencia porque la desconfianza crece en espiral. La cultura individualista afirma, con Margaret Thatcher, que “la sociedad no existe”: sólo existen individuos y hogares. Tal cultura ha minado la solidaridad que permitía generar el mínimo de certidumbre, autoconfianza y seguridad en que se basaba el coraje necesario para ejercer la libertad y desarrollar el deseo de experimentar. Supuestamente tal posición está a favor de la libertad individual y del refugio en la vida familiar que llenaría de sentido la vida, como puede verse hasta en algunos de los más rudimentarios discursos neoliberales. Pero el mismo individualismo no puede dejar de minar los principios de confianza y compromiso en que se sustentan los vínculos familiares, y las personas aterrorizadas por la incertidumbre y la desconfianza están imposibilitadas de cooperar con

sus pares para construir una comunidad donde ejercer su libertad. Así, la familia se asemeja a un contrato cuya duración es variable y puede ser rescindido apenas aparezca otra persona que prometa productos más atractivos o más baratos.

Al desmoronarse las otras instituciones que vinculaban la vida personal a la inmortalidad colectiva –la religión, la nación, el progreso de la humanidad o la liberación de los grupos oprimidos–, todo el peso recae ahora en la vida familiar. Tristemente va a poder cumplir ese papel si además se encuentra cercada internamente por la proliferación de la racionalidad instrumental en las relaciones personales, y externamente por el vacío institucional que generan la inseguridad y la incertidumbre: “una familia cuya expectativa de vida depende de la duración de la satisfacción de ambos cónyuges (sin trascenderla), no puede ser considerada seriamente como estrategia destinada a paliar el pavoroso y cruel embate de la mortalidad individual”.

Obviamente, esta incertidumbre puede ignorarse a costa de desbaratar las propias expectativas, o bien puede enfrentarse tratando de poner toda la energía en aspectos fútiles de la realidad que puedan ser razonablemente controlados, como la obesidad o el pesimismo. La otra respuesta es mucho más ambiciosa y conlleva el costo de arriesgar incesantemente la respetabilidad: la actividad continua y comprometida en favor de construir una comunidad donde la seguridad se alcance a través de la integración social, reclamando y aceptando medidas que permitan que todos puedan ejercer sus derechos económicos, otorgando pública y privadamente igual consideración a todas las personas y aceptando limitaciones en el propio bienestar para que la comunidad pueda decidir libre y participativamente sobre su destino.

## Los que se van

Que en cada crisis económica haya una proporción muy importante de jóvenes que quiera emigrar refleja que algo ha estallado en la Argentina hace ya algunas décadas. Esta crisis golpea por primera vez en mucho tiempo a la gran mayoría de los argentinos, no es exclusivamente económica ni sacude a todos por igual. Se trata indudablemente de un fragmento de la crisis de inte-

gración social. En la Argentina existe una coincidencia inédita acerca de estar viviendo actualmente una catástrofe que viene a confirmar un extenso proceso de decadencia que la separa drásticamente y vergonzosamente de un mundo globalizado. Esta percepción atraviesa a todos los estratos sociales. Se expresa con bronca, con mucha bronca. Hace pocos años esta situación era impensable: si bien ya existían signos de aumento de la violencia social y de la cantidad de personas en situación de pobreza, algunos alardeaban mostrando sus casas en revistas, pretendiendo afirmar los supuestos méritos personales que les permitieron lograr fabulosas ganancias y el buen gusto para consumir.

Zygmunt Bauman afirma que “la movilidad se ha convertido en el factor estratificador más poderoso y codiciado de todos; aquel a partir del cual se construyen y reconstruyen diariamente las nuevas jerarquías sociales, políticas, económicas y culturales de alcance mundial. La movilidad adquirida por las «personas que invierten» –los que poseen el capital, el dinero necesario para invertir– significa que el poder se desconecta en un grado altísimo, inédito en su drástica incondicionalidad, de las obligaciones: los deberes para con los empleados y los seres más jóvenes y débiles, las generaciones por nacer, así como la autorreproducción de las condiciones de vida para todos; en pocas palabras, se libera del deber de contribuir a la vida cotidiana y la perpetuación de la comunidad. Sacarse de encima la responsabilidad por las consecuencias es la ventaja más codiciada y apreciada que la nueva movilidad otorga al capital flotante, libre de ataduras; al calcular la «efectividad» de la inversión, ya no es necesario tomar en cuenta el coste de afrontar las consecuencias”.

Confirmando la afirmación de Bauman, la crisis en la Argentina estalla y solamente pueden excluirse de ella unos pocos, huyendo. A ello se le agrega la inconsecuencia de algunos al pretender no sufrir individualmente consecuencias de una crisis generalizada –salir de la crisis en igual situación a la que se estaba antes de que ocurriera–, o al suponer que se puede estar personalmente mejor tras una crisis sin afectar el bienestar común. La Argentina es una Nación que está habitada por una muy importante proporción de descendientes de emigrantes que huyeron de Europa porque encontraban aquí más oportunidades contra la pobreza. La gran diferencia es que hoy huyen quienes más

oportunidades tienen de hacerlo: en una sociedad donde todos los niveles de educación son gratuitos, una proporción muy importante de quienes emigran tienen estudios superiores. Si esta emigración masiva es dolorosa para los argentinos por diversas razones, también lo es porque supone perder a los jóvenes más ambiciosos y en quienes la comunidad más ha invertido al formarlos.

Ahora bien, ¿por qué estos jóvenes se niegan a soportar en el país que los ha formado las consecuencias de una crisis? O peor, ¿por qué sus padres y amigos los alientan a huir? En parte, para muchos de ellos la devaluación y la falta de trabajo estable han suspendido los sueños de progreso con los que habían cursado sus estudios. Si se trata o no de una pérdida definitiva, es un tema a resolver. Pero la mayoría de los jóvenes que hoy emigran ya planeaban hacerlo antes de la devaluación, y de hecho ya muchos se habían ido. Y otros lo hacen aún teniendo algunas oportunidades profesionales en la Argentina, aunque la pérdida de un puesto de trabajo pueda ser la causa inmediata: lo cierto es que la mayoría se va a “pagar el derecho de piso” en trabajos de muy baja calificación, en la esperanza de que con el tiempo puedan recibir buenos ingresos y reconocimiento profesional.

Indudablemente, la crisis más visible es la socioeconómica: por ella, muchos hogares pierden oportunidades de acceso a bienes y servicios mínimos para considerarse integrados a la sociedad. Por otro lado, la disminución de la actividad económica deteriora fuertemente los recursos y la capacidad del Estado para llevar adelante políticas de integración social. La emigración de muchos argentinos se explica en parte por la persistencia de la declinación de la economía argentina.

Hay otra crisis visible, pero de más larga duración: la de pertenencia. Históricamente, la Argentina se diferenció de otros países como Estados Unidos porque una proporción importante de los inmigrantes nunca se nacionalizaron. Según afirma Torcuato Di Tella, ello se debería al escaso prestigio que adjudicaban a la Argentina: los inmigrantes europeos de la segunda mitad del Siglo XIX y de la primera del Siglo XX en gran medida mostraban una actitud de desprecio hacia las tradiciones de la Argentina, hacia su sistema político y hacia su antigua composición étnica. Rechazo que de todas formas se complementaba con la actitud de desprecio que recibían de la clase alta criolla. Aún hoy, hablar

el castellano con dificultad y con fuerte acento extranjero –aunque eso depende del origen del acento, pues no reciben la misma consideración el acento británico, francés o alemán que los de países limítrofes o asiáticos– es considerado prestigioso en una Argentina que fue vista como un terreno de oportunidades para el ascenso social, no como una Patria a la cual pertenecer. El orgullo desmedido de los argentinos, internacionalmente reconocido, se basa en buena parte en dos factores que poco tienen que ver con la pertenencia: la belleza del paisaje y el ingenio de las personas. Y tiene su contraparte en el profundo complejo de inferioridad respecto a naciones más desarrolladas, por ejemplo, por sus manifestaciones culturales, por la forma en que allí se respetan las normas o por la generalización de la disciplina y la constancia en el trabajo.

También hoy, en buena medida como consecuencia de la globalización, hay una crisis de expectativas que lleva a muchos argentinos a emigrar. En la Argentina, han ocurrido frecuentes migraciones internas o provenientes de países limítrofes. Tradicionalmente, Santiago del Estero es una Provincia cuya música está profundamente influida por la emigración forzada por la pobreza. Pero, como afirma Floreal Forni, ésta se ha producido siempre como parte de una estrategia familiar de supervivencia: el mandato es aportar personalmente desde donde sea posible para que la familia pueda sobrevivir. Se trata de una emigración dolorosa, como lo destaca su folclore, pero no es anómica ni alienada. Para los sectores sociales de los que salen los jóvenes que hoy emigran de la Argentina, el mandato no es preservar una estrategia familiar, sino procurar un despegue individual: se debe ascender socialmente, donde sea posible. Al percibir que no pueden hacerlo porque la Argentina ha caído del paraíso de las inversiones extranjeras, quieren cumplir con el mandato emigrando, aun con todos los riesgos que ello implica. Es una emigración no tan dolorosa para ellos, porque valoran menos el lugar y la ciudad que dejan, pero es profundamente alienante: no se van llorando, se van insultando. ¿Querrán volver algún día?

## Integración y reforma política

La mejor imagen de la Argentina actual es la de un paraíso perdido. De todas formas, obvia-

mente no ha existido nunca en las últimas décadas un período en que se haya creído que la vida en ese momento era un paraíso. Esa continua visión crítica forma parte de la conciencia activa sin la cual la realidad se cristalizaría, y con ella las injusticias y las oportunidades para paliarlas. Lo que diferencia a esta época de las anteriores es que ya no hay esperanza en el futuro: no sólo se representan las condiciones actuales como una catástrofe; también se ve con malos ojos al futuro, el inmediato y el lejano. Ello en parte ocurre porque la confianza en el progreso se basaba en promesas utópicas, pero también porque la conciencia crítica se ha empobrecido: todo se simplifica hasta el punto de suponerse que la causa de la crisis es una sola y, por lo tanto, se razona como si bastara cambiar algo para que casi todo se resuelva. Según algunos, la única causa de la crisis es la falta de crecimiento económico; según otros, es la corrupción o la impericia de representantes y funcionarios; y para otros tantos, la crisis se debe al despliegue de un gran demonio titulado neoliberalismo. Si no es razonable negar la importancia de éstos y otros factores, tampoco es serio pretender que se dispone de semejante especialización en las capacidades de diagnóstico.

Cuando comenzó la elaboración del primer Informe Argentino sobre Desarrollo Humano, en 1994, a la euforia de ciertos sectores por los logros económicos pudo oponérsele una voz tranquila que afirmaba que la sustentabilidad del crecimiento estaba en duda si no se otorgaba prioridad al Desarrollo Humano. Con el correr de los años, se han multiplicado los reclamos que se orientan a la necesidad de formular otro modelo de desarrollo. Paradójicamente, la crisis económica, lejos de servir para demostrar la inconsistencia social y económica de los modelos aplicados, pareciera haber disciplinado a algunos sectores críticos: la urgencia por salir termina por derribar ciertas resistencias. A la vez, en Estados Unidos y Europa, en los últimos años se han desencantado de estos modelos sus propios fundadores, pero los organismos financieros internacionales siguen inercialmente exigiendo su cumplimiento estricto. Buena parte de los supuestos resultados que se adjudican a la última depresión económica ya existían antes de que ésta se iniciara. El aumento de la pobreza y de la precarización laboral ya eran claramente visibles antes del inicio de la crisis de los

últimos cuatro años. Obviamente, comparados con la situación actual de la Argentina, se perciben como asuntos de menor importancia los problemas de mediados de la década pasada. En ella, el Gobierno Nacional y el Congreso otorgaron una importancia primordial a la aplicación de reformas que permitieran liberar de obstáculos al crecimiento económico, con el apoyo decidido de organismos internacionales que brindaron créditos abundantes para ese fin. Hasta hace poco más de un año, los sectores que alentaron estas políticas seguían afirmando que los resultados no eran los esperados porque las reformas no habían sido lo suficientemente drásticas. Gobernadores, legisladores y empleados públicos han sido objeto de innumerables investigaciones y propuestas para ser disciplinados, en el supuesto de que las reformas tendrían mayor efectividad si ellos no tuvieran poder para resistirlas. No es casual que, junto con los reclamos por menguar el gasto público, surgieran propuestas de reducir la cantidad de representantes y hasta el número de municipios y provincias. Se trata de posturas fundadas sobre argumentos dudosamente democráticos, y en todo caso la crisis de representación y la sospecha generalizada hacia quienes ocupan cargos públicos supuestamente autoriza para argumentar que cercar a éstos serviría para liberar a la comunidad de inanes y corruptos. Para estos planteos, la única magia reside en el crecimiento sostenido del producto nacional, sin más adjetivos. Cuando ello ocurra, podrán liberar sus conciencias quienes desde hace décadas vienen pidiéndoles paciencia a pobres e indigentes.

Por otra parte, el discurso que pretende ver la panacea en la lucha contra la corrupción fue deliberadamente difundido por candidatos a cargos electivos y periodistas que afirmaban que un gobierno más honesto implicaba automáticamente solucionar los problemas de la pobreza y la desocupación. El rotundo fracaso de quienes accedieron al gobierno con este argumento no ha alcanzado para desacreditar la hipótesis, sino paradójicamente para reeditarla: la impericia sería entonces una forma de corrupción. De esta manera, se construye una imagen oronda en la que la realidad es simplemente el producto de una categoría separada de personas que se distinguen por ser simultáneamente torpes y malintencionados. Es sin duda una forma muy sencilla para poder afirmar la propia pure-

za respecto a los procesos y los resultados de la acción estatal.

La otra fórmula, la de la denuncia al neoliberalismo, también es muy apreciada por quienes reclaman un amplio reconocimiento para sus propias buenas intenciones y que en consecuencia se ejecute sumariamente a quienes identifican como culpables de todos los males. Esta versión parece más ingeniosa o académica: como fueron de ideología neoliberal quienes condujeron buena parte de las reformas aplicadas en la pasada década, todos los problemas que hayan surgido en ella –y de paso algunos que ya antes existían– se podrían adjudicar a esa ideología. Indudablemente, como lo exponen Bourdieu y Wacquant, “las argucias de la razón neoliberal” no son pocas. Pero pretender que todo lo que disgusta es producto de un proyecto deliberado es adjudicarle a éste mucha más capacidad de la que nunca pueda llegar a tener. Por ejemplo, hay quienes afirman que la corrupción es causada por la ideología neoliberal, lo cual constituye una absoluta necesidad. De la misma forma, pobreza, apatía política, falta de solidaridad, crisis de representación, insuficiente idoneidad en las oficinas públicas, violencia o morosidad del poder judicial, entre muchos otros fenómenos, son difícilmente productos exclusivos de la ideología neoliberal, aunque muchos de ellos se hayan agravado por la aplicación de sus recetas.

Además, al tratar de orientar la crítica social hacia un conjunto de personas, con frecuencia en este discurso se confunde alegremente capitalismo, economía de mercado, ciencia económica, ideología neoliberal y cultura individualista. Se trata de una confusión que limita severamente las capacidades para reformular con eficacia las políticas públicas.

El antropólogo Louis Dumont opone las sociedades tradicionales que valorizan “la conformidad de cada elemento a su papel en el conjunto, en una palabra, a la sociedad como un todo”, de las individualistas, “que valoran en primer lugar al ser humano individual”. Las ideas y valores compartidos que ubican a la economía en el corazón de la vida social “constituye una de las expresiones más características y más acabadas del individualismo en las sociedades modernas”. Es el resultado de un proceso histórico de valorización de las finalidades individuales respecto a las colectivas. Bernard Perret y Guy Roustang afirman que

la economía de mercado está indisolublemente ligada a los valores del individualismo y de la democracia: “la autonomización de lo económico con relación a la ética y a lo político forma parte del movimiento de emancipación con respecto a las visiones del mundo tradicional, es uno de los componentes esenciales del movimiento de desencantamiento del mundo, y nadie puede pensar seriamente en volver atrás en esta evolución”. La economía de mercado es un fuerte apoyo a esta cultura, en tanto “no presupone ninguna finalidad colectiva, ninguna norma exterior” que deban respetar las personas que participan del intercambio comercial. Ya antes del surgimiento de la ciencia económica en el Siglo XVIII, numerosos filósofos políticos hicieron la apología del interés personal como principio para limitar la opresión política, racionalizar las pasiones y controlar la violencia. Pero como lo señala Dumont, para que la economía pueda tener autonomía respecto a la ética, es preciso que disponga de argumentos que puedan probar que está “naturalmente orientada al bienestar del hombre”. Pero allí y no en la vulgarización de la conducta individualista debe centrarse el debate: “la economía no está exenta de probar que está orientada hacia el bien del hombre”. Una inversión privada no puede valorarse pura y exclusivamente por la cantidad de empleos que genera, y menos por el tamaño de la riqueza que produce. Esta es la distinción que debe formularse, y mal puede hacerse si en el ardor por demostrar la buena disposición se confunden los significados. Como afirman Perret y Roustang, “la fuerza de la perspectiva económica descansa en el hecho de que ella permite eludir todo debate sobre las finalidades: su único fundamento es la idea indiscutida de que la satisfacción de las necesidades individuales constituye un fin legítimo y suficiente para la sociedad y que es posible satisfacer estas necesidades produciendo más”. Esta lógica pretende trascender la relevancia de la fijación de prioridades propia de la política. Castoriadis sostenía que “los individuos están considerados para forjar un sentido a su vida, independientemente de todo marco y de todo proyecto colectivo, lo que es un absurdo total”.

En parte, adjudicar todas las culpas actuales al neoliberalismo es continuar con la saga iniciada por cierto nacionalismo que sospechaba una conducción de la mano invisible del “imperialis-

mo” en los más disimulados rincones de las sociedades latinoamericanas. La otra ventaja de esta versión podría deberse a la incapacidad de buena parte de las Ciencias Sociales para vincular la producción de conocimientos con una intervención significativa sobre la realidad social. La irrelevancia para formular y aplicar reformas efectivas intenta ser revertida por la mayoría adjudicando toda la producción de teoría social y política a la pomerosizada descripción, explicación, acusación, juicio y sentencia del neoliberalismo. Así, se resuelve mágicamente lo que Martín Hopenhayn llamó “crisis de inteligibilidad” de las Ciencias Sociales, es decir, “la progresiva dificultad del cientista social para captar la creciente complejidad de lo real con sus herramientas cognoscitivas previamente consagradas”. La difusión de análisis críticos en círculos académicos europeos otorgaría el paraguas académico para una formación universitaria que crecientemente se limita a criticar al economismo basándose en un discurso que contiene cada vez más categorías de la Ciencia Económica, y que con ello procura ocultar su pereza o su incapacidad para formular proyectos macrosociales que puedan aplicarse con éxito fuera de las aulas y de los libros. La Universidad así concebida deja de ser laboratorio y ámbito de reflexión para convertirse en platea vociferante.

No es casual que en las tres explicaciones coincida el nombre que se aplica a los culpables: “los políticos”. En el rótulo se incluyen, según resulte necesario para cada argumentación, a los funcionarios que ocupan cargos electivos en el Estado o en las asociaciones profesionales y empresariales, a quienes ocupan cargos jerárquicos en los organismos administrativos del Estado, o a todos los empleados públicos que no son docentes, policías o personal del sistema de salud. “Los políticos” son quienes pueden ser odiados sin perder respetabilidad o acusados de corruptos e incapaces, sin necesidad de discriminar entre las personas, porque son legión. Para otros, son quienes con sus reclamos obstruyen la libre aplicación de reformas y recetas económicas, sin perjuicio de ser también acusados de haber permitido la aplicación de las políticas inspiradas por el neoliberalismo. Como afirma el politólogo italiano Gianfranco Pasquino, se parte de la errónea concepción de que la política “es la actividad realizada exclusivamente por los políticos: que deba existir una casta compuesta principalmente

por personas de mediana edad, con buen nivel de instrucción y una renta bastante elevada, que sean los depositarios exclusivos de los conocimientos y de las estrategias políticas”. Para Pasquino, “la sociedad argentina debería interrogarse sobre su historia pasada y reciente, y los mismos ciudadanos deberían asumir sus propias responsabilidades: ¿cuántas veces han solicitado y obtenido favores clientelistas? ¿Cuántas veces han eludido la ley? ¿Cuántas veces votaron por un político no por su capacidad y sus propuestas, sino para obtener algo a cambio? También en las democracias de más larga data existen crisis similares de representación. Lo importante es que se haga referencia a una pluralidad de instrumentos y no se busque una especie de mago, una varita mágica que resuelva todo en un abrir y cerrar de ojos”.

Existe una tendencia relativamente común a ciertos ámbitos banales de la lucha discursiva, que consiste en aceptar por bueno todo argumento o dato que apunte al objetivo buscado, sin importar si parte de premisas consistentes con las propias o si respeta o no las mismas reglas lógicas. Suele ser una ingeniosa táctica para producir mucho ruido y hacerse oír, pero frecuentemente no es eficaz para que escuche quien debe hacerlo, y mucho menos para lograr establecer un acuerdo público razonable construido sobre la libre exposición de intereses generalizables. Por ejemplo, en el debate sobre la reforma política, al mezclarse argumentos democráticos con otros antidemocráticos, se consigue poco más que ruido. Mucho debería cambiarse en la actividad política: prácticas, normas, exigencias, recursos y personas. Tal vez sea más lo que hay que reformar que lo que se debería conservar. Pero no todo está perdido y no todo es desechable, y además hay que ser cuidadosos si no se quiere tirar al bebé con el agua de la bañera. Es cierto que existen dirigentes políticos que tapan sus oídos y se niegan a escuchar por entre el ruido a las voces sensatas que les piden que deben ellos depurar sus propias filas para evitar un mal mayor. Asimismo, es riesgoso seguir pretendiendo que sean las estructuras partidarias burocratizadas y anquilosadas las que den respuesta a un reclamo generalizado de transformación: ésta sólo puede venir de un cambio en las actitudes y los compromisos de todos sus integrantes. Es cierto también que, si bien se trata de una tendencia que aumenta en todo Occidente, en ningún lugar como en la Argentina parece tan

definitivamente quebrado el nexo subjetivo que debe producir una identificación entre el ciudadano común y sus representantes. Además, como en tantos otros sectores de la sociedad moderna en un contexto de fuerte incertidumbre, la racionalidad individual lleva a proteger lo que se tiene aun a costa de arriesgarse a perderlo todo por un aumento de la irracionalidad colectiva, y por lo tanto se resiste cualquier cambio que implique hasta una pérdida mínima, inclusive en el caso en que exista una razonable previsión de que cambiar es la única forma de continuar. Esta crisis no podrá ser modificada mientras prevalezcan las actitudes de preservación de espacios adquiridos, pues mucho se puede perder si no surge una nueva conciencia acerca de la necesidad de resguardar ciertos principios democráticos que trascienden los intereses particulares: si es cuestionable la actitud de un empresario que lleva a la ruina a una firma por preferir asegurar beneficios de corto plazo, es absolutamente inaceptable que semejante actitud predomine en la actividad política, por cuanto no sólo se afectan las posibilidades futuras de supremacía del propio partido político, sino también las de todo el régimen democrático. Pero el debate sobre la política se orienta muy mal si se lleva predominantemente por el lado de las cualidades personales.

Hace cuatro años se mencionaba en el Informe sobre Seguridad Humana que la espiral individualista conlleva el riesgo de mezclar el mérito exclusivamente individual en los éxitos con la sobrecarga de culpas individuales ante los fracasos. Al menos en la Argentina, eso ya no es un peligro: se tiende a afirmar los méritos en términos individuales, y a la vez a descargar en la sociedad política todas las culpas de los problemas personales. Por el crecientemente legitimado supuesto de que se puede ganar en los momentos de bonanza y también en los de crisis, y por la existencia de grupos que, burlando o estafando, han conseguido salvarse de tales crisis, se procura afirmar la propia pureza de intenciones y por lo tanto la intangibilidad de las propias pretensiones. Se trata de un camino casi sin retorno: el único ciudadano cuya voz es creíble según esta concepción, es aquel que declara no tener la demoníaca ambición de pretender ocupar un cargo público. Hasta hace unos pocos meses, esto no resultaba de todas formas un problema demasiado relevante, pues semejante actitud se enfrentaba a la legitimación de los

cargos que se operaba en cada elección. Pero hoy ni siquiera las elecciones sirven para autorizar a quienes deben tomar decisiones. Se está llegando así a un planteo peligroso, pues la demanda válida a las instituciones no puede servir para destruir una de las bases de la sociedad libre: la formación democrática de los gobiernos. Para que haya libertad, los gobiernos no solamente deben formarse democráticamente, sino además, para que haya democracia, debe haber gobierno. Es algo obvio que suele perderse de vista cuando la banalidad del debate lleva a centrar la representación de los problemas en características personales.

El asunto no puede ser dejado de lado con el argumento de la urgencia que genera la crisis: para que el proceso de integración social se refuerce, se requiere fortalecer las instituciones del Estado, que es el único centro consciente de la comunidad que puede dar cuenta de la totalidad. Indudablemente, el Estado refleja las relaciones de poder en la sociedad, pero es un reflejo activo que a su vez las modifica y las reorienta. De otra forma no se explicaría el interés que tienen todos los sectores sociales por ocupar posiciones de poder en él. No es un asunto de opciones: en las sociedades contemporáneas no hay integración posible sin un Estado democrático con capacidad para gobernar. Como ya se desarrolló en informes anteriores, la gobernabilidad puede diferenciarse en tres niveles que mutuamente interactúan reforzándose: existencia de *recursos* (económicos, sociales, técnicos, políticos) suficientes como para transformar la realidad en función de proyectos colectivamente debatidos y formulados; atribución de *legitimidad* popular a las instituciones públicas y comunitarias y a sus esferas de intervención; y *capacidad* de gestión en tales instituciones para utilizar los recursos disponibles en la transformación de la realidad en función de las esferas de legitimidad atribuidas.

Para todo ello se requiere formar gobiernos que, disponiendo de suficientes recursos, legitimidad y capacidades, respondan a los desafíos que plantea la integración social. Seguramente la formación de gobiernos no es un “juego imposible”. Sin duda existirían posibilidades de renovación total de los cargos electivos y jerárquicos en el Estado, siguiendo fielmente la demanda que promueven hoy aquellos partidos políticos que se encuentran en ascenso. Demanda a su vez difundida en forma pretendidamente inocente por ciertos me-

dios masivos de comunicación que buscan sublimarse en la medida en que pretenden ubicarse como idóneos y estrictos representantes de la “verdad”, al mezclar pruebas de casos de corrupción política con un discurso genérico de acusación contra toda la actividad política. Se trata además de un proyecto que llama abiertamente a la abstención electoral y que cuenta eufóricamente como propios los votos en blanco o no emitidos.

Si se unificaran para siempre las elecciones legislativas con las presidenciales, se lograría reducir sensiblemente la abstención y la dispersión que se suele producir en las elecciones en las que no se eligen ocupantes de cargos ejecutivos. También, nuevas cámaras y nuevos concejos podrían minimizar la duración de los mandatos, reducir decisivamente sus remuneraciones y las de sus empleados, y a la vez disminuir en una muy importante proporción las de los funcionarios de los poderes ejecutivos. El honor social podría llegar a ser el principal móvil para la actividad política. La política podría incluso ser el único lugar determinante de la vida social moderna en la que no existan intereses privados, un ámbito en que todo se hiciera por alcanzar un ideal exclusivamente altruista. Pero hasta en un supuesto semejante, ¿de dónde saldrían esos sujetos absolutamente desinteresados e indiscutiblemente idóneos? Más difícil todavía es poder explicar cómo se logrará que personas preocupadas casi exclusivamente por demostrar su pureza personal en un contexto de profundo desprestigio pueden llegar a acuerdos efectivos para formular proyectos de cambio social. Resumiendo, si bien es cierto que la moral de quienes ocupan cargos públicos debe ser revisada, es absurdo pretender que la pureza personal sea el único combustible que mueva a las estructuras políticas.

Existe una vinculación lógica entre pretender que quienes se dedican a la política deban ser sujetos absolutamente desinteresados y postular que la actividad política es tan corrupta que contagia a todos los que a ella se aproximan. Ninguna de las dos visiones es razonable, y juntas impiden cualquier consideración seria acerca de la reforma política. Se ha llevado el ideal del desinterés hasta un nivel tan inalcanzable, que en la práctica se califica de “idealismo” a cualquier argumentación en favor de un interés público que no se asocie visiblemente a un interés particular. Lo cual es lisa y llanamente confundir las cosas: es tan absurdo pretender que

el único móvil de la actividad política es el bien común, como cínico afirmar que no es realista reivindicar que las instituciones públicas son creadas y financiadas para la búsqueda del bien común. Acercar el ideal de las motivaciones particulares a la realidad de la acción política es una buena forma de acercar la realidad de la práctica política al ideal de bien común. Es una forma de frenar el proceso –más o menos consciente– de traducción por el cual quien públicamente habla del interés común, mentalmente piensa “en cuánto voy yo en todo esto”. Esto es cierto no sólo para quienes ocupan cargos electivos, sino para todos aquellos que de una u otra forma se benefician de los fondos públicos, incluso para quienes no son empleados a sueldo del Estado. El problema se agrava ya que éstos razonablemente aspiran a asegurar su fuente de ingresos y por ello reducen el interés público a un simple instrumento necesario para consolidar una carrera. En un ensayo reciente, el novelista mexicano Carlos Fuentes menciona el proceso por el cual las celebridades de los medios de comunicación audiovisuales no se miran a sí mismas “en la actualidad de sus presencias”, sino que prefieren contemplarse reproducidas en las pantallas de televisión: su realidad es su representación, no su presencia física. Lo que las distingue de las demás personas es que sólo se reconocen “a sí mismos y entre sí en una pantalla”. No es razonable pretender que en su vida real sean iguales a la forma en que se representan. De la misma manera, hay quienes construyen una carrera pública sobre la base de un criterio de representación por el que no se pretende que la verdadera motivación sea la que se hace pública.

El delgado tabique que separa la hipocresía de un ideal político fundado sobre objetivos posibles consiste en sostener, como principio moral, que nadie debe llevar adelante una función pública si no puede articularla con un proyecto colectivo que trascienda su carrera personal y el bienestar de su familia. Esto debe ser válido para quienes ocupan cargos electivos, para los funcionarios y profesionales de carrera, para los médicos y los docentes, para los policías y los investigadores. Parece simple, pero en el contexto de una cultura que hace del éxito profesional –medido en términos de ingresos o de tipos de actividad, no en función de resultados alcanzados– una de las bases principales de la identidad personal, y que afir-

ma como obligación irrenunciable la de buscar – por todos los medios posibles– garantías para el bienestar de la propia familia, lo que debe diferenciar a la actividad política de otras formas de trabajo no es el desinterés, sino la trascendencia.

A pesar de que cierto periodismo, anclado en un principio tradicional de logro individual, intenta demostrar que sólo el sacrificio personal es el que puede transformar la realidad, la trascendencia de una actividad no puede alcanzarse individualmente, sino por medio de grupos que representen ideales sociales. Si hoy la cultura narcisista busca demostrar que es falso el principio de que “nadie se realiza en una sociedad que no se realiza”, lo cierto es que ninguna comunidad se realiza mientras el principio de realización sólo se reduce a preferencias personales. A diferencia del delgado tabique que puede justificar o no una elección personal, la enorme diferencia entre la acción individual y la grupal es que en esta última ninguna elección puede justificarse si no se funda sobre intereses y valores generalizables. Un diálogo imaginario redactado por el humorista norteamericano Scott Adams sigue una secuencia absurda de argumentación: los políticos mienten para que los elijan, pero nadie les cree; sin embargo, siguen mintiendo porque no serían votados si dijeran la verdad, lo cual no significa necesariamente que “a la gente le gustan las mentiras y no le gusta la verdad”.

La única forma de salir de la trampa de las motivaciones personales de quienes intervienen en la actividad política es juzgar como inaceptable cualquier pretensión de legitimación personal que no se base en un proyecto colectivo. Para eso no solamente se debe cambiar la moral de la política, sino también la costumbre predominante de querer elegir presidentes, legisladores, gobernadores o intendentes municipales según sus características personales. Elegir personas por esas cualidades es provocar que se representen como las celebridades artísticas, es decir, ocultando sus vidas reales. En cambio, elegir entre ideales y valores, entre proyectos colectivos promovidos por organizaciones que por su parte eligen a quienes los llevarán adelante, es la forma en que el voto y la participación se pueden transformar en un factor de cambio social que dé sentido trascendente a las motivaciones personales de quienes ocupan cargos.

Como han demostrado hace casi medio siglo Wolfgang Abendroth y Otto Kirchheimer,

mientras las candidaturas sean estrictamente personales, la política más va a recurrir al *marketing* y a la publicidad al estilo comercial. Y nadie pretende que en la publicidad se diga estrictamente la verdad, ni que se explicita pormenorizadamente de qué forma el producto promocionado cumple con sus promesas de bienestar. La construcción de la acción política como proyectos meramente personales lleva a una lógica mercantil de relevamiento de demandas y diseño de propuestas, cuya principal calidad reside en que permite “vender el producto” por sus cualidades exteriores.

De hecho, hasta los anuncios de las cámaras empresarias de agencias de publicidad difunden su forma de ver a la política como la fabricación de un buen producto que pueda ser enseñado. El problema es que ellos traducen ‘valores’ por ‘cualidades personales’, porque es lo que mejor se asocia a las reglas del *marketing*. No es que no tengan razón al reclamarlo, tanta falta hace una transformación ética. Pero en política la única forma de transformar las motivaciones personales es mediante proyectos colectivos. Así como Adam Smith pudo demostrar hace más de dos siglos que la buena economía no dependía de transformar las conciencias, sino de modificar las estructuras por las que las personas interactúan, lo mismo puede decirse de la acción política. Y eso es justamente lo contrario de suponer que la política o la actividad económica son puramente instrumentales y totalmente independientes de los valores: lo que garantiza la relevancia de los principios es precisamente la estructura social que se forma o transforma en función de ellos. No puede ser esa una acción individual, porque mal podría esperarse que un candidato a ocupar un cargo público pueda explicar la forma en que personalmente va a lograr una mayor integración social. Solamente puede pretender hacerlo un grupo social que públicamente construya un debate por el cual se elija entre diferentes valores y entre medidas instrumentales alternativas.

Un valor no puede ser verdadero o falso, y por eso postularlo en forma colectiva evita la tendencia a preguntarse si una persona que realiza una propuesta está o no mintiendo. A lo que sí debe llevar la difusión de una propuesta colectiva es a debatir públicamente acerca de su consistencia con los valores que lleva implícitos y con otros que la comunidad considera relevantes, así como de la coherencia entre los instrumentos propues-

tos y los resultados que se desea alcanzar. La división entre los partidos políticos es una negación del principio tecnocrático que alienta a las propuestas de los publicistas y a los reclamos de ciertos periodistas, que razonan como si toda la acción política pudiera ser resumida en términos de una gestión idónea y honesta, y por lo tanto ajena al debate por los intereses. Como afirman Fitoussi y Rosanvallon, la existencia de partidos “es un testimonio de la pluralidad de las respuestas posibles a las cuestiones que la sociedad debe encarar. El arte de la gestión presupone que siempre hay una solución, y una sola, que optimice las restricciones”. El campo de lo político, al contrario, se funda en la constatación de la construcción social de la realidad en función de valores y elecciones. La división de la política “ofrece un rostro representable a las contradicciones de la acción: entre el corto y el largo plazo, entre el resultado evidente y el riesgo del efecto perverso”. Por lo demás, aun cuando se postulen –como orientaciones de la acción pública– utopías cuya plena realización es improbable –la de la integración social plena es una de ellas–, el interés por lograr su consagración lleva a que se transforme en el espíritu que guía la acción del Estado.

En la publicidad comercial se suele argumentar como si el producto por sí solo pudiera dar satisfacción, dando por supuesto que los restantes requerimientos para que eso ocurra están sobreentendidos. Por ejemplo, las promociones de automóviles o de impresoras no mencionan los costos adicionales o los requisitos previos que su adquisición implica. La publicidad comercial –y de hecho, casi toda la comunicación masiva– está orientada a promover estilos de vida que no exigen cambios en las diferencias de ingresos entre los consumidores. Cuando se aplican los mismos supuestos a la propaganda política, se pretende que la calidad del candidato –sus buenas intenciones– se basa en que no reivindica cambios drásticos en la estructura social. En el peor de los casos, el reclamo para que se reconozcan las buenas intenciones reside en afirmar que la sinceridad del candidato consiste en reconocer su impotencia para transformar la estructura social. Fitoussi y Rosanvallon afirman que “la distinción entre la derecha y la izquierda correspondía a una época de enfrentamientos sociales e ideológicos, y de oposición de proyectos de sociedad”. De

continuar la actual tendencia, “los criterios de clasificación se tornarán más individuales que colectivos. La antigua oposición entre progresistas y conservadores será reemplazada entonces por la distinción entre los hombres políticos honestos y los corruptos, las personas de buena voluntad, preocupadas por el interés general, y los cínicos que persiguen una meta egoísta de ocupación del poder”. En las democracias occidentales “tiende a formarse un consenso de nuevo tipo, no en el sentido ideológico que se atribuía tradicionalmente a ese término, sino en el de un *consenso de buenos sentimientos*. El desarrollo de la ideología humanitaria sobre las ruinas de la política tradicional corresponde al mismo movimiento. Es preciso afirmarlo con vigor: la compasión no puede servir como política. Ésta no es cosa de buenas intenciones. Implica arbitrajes y opciones”. En la política de los buenos sentimientos se seduce al ciudadano halagándolo y tranquilizando su conciencia: “no se habla ni de impuestos ni del costo de la solidaridad; no se discuten los efectos eventualmente perversos de ciertas políticas sociales, así como tampoco se procuran determinar verdaderos derechos. Uno se contenta con dar testimonio de una forma de solicitud. Es una manera piadosa de erigir la impotencia en valor moral”.

Así, la voluntad política de transformar la realidad se transforma en una mera ‘buena voluntad’. El aumento explosivo de la desigualdad desconcierta a muchos porque lo perciben como producto de un proceso puramente aleatorio –y por lo tanto arbitrario– que afecta a unos y perjudica a otros. Por eso, la incertidumbre se asocia a una frustración de la cual es difícil encontrar explicaciones, y así, “cuando ya no se puede denunciar al sistema, uno se la toma global y vagamente con «los de arriba»”. Los medios masivos de comunicación exponen diariamente la situación de los excluidos como una acusación a la dirigencia política, pero a la vez se comportan como si fuera natural que en el mismo país existan quienes pueden comprar los objetos de lujo con los que se paga la publicidad que los sostiene. Lo que no se dice públicamente en ellos es que en una república nadie puede vivir como un príncipe si no hay otras personas que vivan como mendigos. Querer reducir la exclusión “sin modificar las reglas del juego para todos, no es más que ilusión y mentira”. Por eso la democracia no es cuestión de pureza ni de buenas

intenciones. Es asunto de proyectos comunes, de elección colectiva en función de valores generalizables, de articulación de demandas pero también de generalización de compromisos y de obligaciones costosas. Por supuesto, una nueva generación de dirigentes combinada con una depuración del actual plantel podría hacer mucho en favor de la calidad del régimen político. Pero la política no puede dejar de reflejar los valores de la sociedad, y ésta es la que define qué proyectos deben ser priorizados. No se puede pretender disfrutar de todos los beneficios de pertenecer a una sociedad excluyente y a la vez culpar a los políticos de las consecuencias de la exclusión. Hay que elegir, y para hacerlo se deben asumir obligaciones, exigir cambios y hacerse cargo de unas y otros.

Bien entendido el problema, tampoco es razonable utilizar el argumento de la estabilidad democrática para avalar las prácticas políticas que la bastardean. No se trata de procurar encontrar personas puras que dejarían de serlo apenas accedan a cargos públicos, porque supuestamente ocuparlos sería en sí una demostración de incompetencia o de mala voluntad. Más bien, deben modificarse las estructuras de la actividad política que condicionan el accionar de quienes aspiran a ocupar cargos públicos, así como la moral que impera en las instituciones estatales. Para explicarlo, a continuación se citarán algunos ejemplos que han sido mencionados en las entrevistas realizadas para la elaboración de este Informe.

En numerosos casos, las normas administrativas son tantas y tan enrevesadas que resulta casi imposible tomar decisiones ajustadas a ellas y que a la vez sean eficaces y equitativas. Incluso, cuando supuestamente han sido dictadas para fortalecer la capacidad de contralor de los actos administrativos, los trámites se demoran tanto que terminan favoreciendo la consolidación de quienes ocupan posiciones exigiendo sobornos para llevar adelante aun los trámites más necesarios. De esa manera, las estructuras de contralor terminan resultando absurdamente incapaces para diferenciar los trámites legítimos de los ilegítimos. La información requerida para llevar adelante un procedimiento a veces es tan oscura que con ello se facilita la tarea de quienes se convierten en especialistas –a veces rentados, otras no– en “empujarlos”. Quien brinda información suele considerar que está haciendo “un favor”, aun cuando se

refiere al uso de recursos públicos; de allí que sea común que se pretenda una contraprestación –sea o no en dinero– por tales socorros, y ello puede constituir un delito o simplemente un intercambio amigable a expensas de los recursos públicos. Así, “la confusión genera empleo”: en ciertos ámbitos es excesivo el tiempo que funcionarios y empleados dedican al intercambio de favores, aunque en muchos casos se trata de correcciones legítimas a la arbitrariedad de algunas reglas administrativas. Pero, en conjunto, las trabas burocráticas excesivas no sólo causan desempleo en el sector privado, sino que también generan el empleo de aquellos que manejan información a costa de la eficacia de las instituciones públicas y la equidad en el acceso a sus recursos.

Además, debería realizarse un análisis abierto –que evite las generalizaciones motivadas en argumentos antidemocráticos, pero que deje también de lado la hipocresía de afirmar que nada falla– de la moral que impera en las instituciones públicas, en muchos casos similar a la de grandes empresas privadas. A diferencia del caso de los procedimientos administrativos mencionados, se trata de un fenómeno que no puede ser estudiado sin considerar las particularidades locales. Así como en la escuela argentina, quien delata a quien está cometiendo una falta es un mal compañero, a pesar de que las normas legales obligan a denunciar los delitos, en los organismos del Estado ocurre lo mismo: delatar es ser mal colega. Y ello no sólo está referido a la existencia de actos delictivos o deshonestos, sino incluso ante los casos de incapacidad manifiesta, pereza o descuido de funcionarios y empleados. De la misma manera, así como los espacios públicos son utilizados frecuentemente por algunos vecinos como si fueran de su exclusiva propiedad, muchos funcionarios y empleados utilizan sus instrumentos de trabajo para provecho propio, hasta con una liberalidad que de ninguna manera aplicarían si se tratara de sus bienes.

La moral predominante en las instituciones públicas refleja algunas normas tradicionales de conducta que afectan la equidad. Algunas pautas de lealtad personal que predominan en las pequeñas empresas privadas se ven replicadas en espacios reducidos de las instituciones públicas y en las organizaciones comunitarias, tanto en la relación jerárquica que se establece entre funcionarios y empleados, como en la que vincula a agentes y vo-

luntarios con los beneficiarios de las políticas públicas. Ya Max Weber había analizado a comienzos del Siglo XX el patriarcalismo político, definido como la situación en que los subordinados dan su lealtad y obediencia a una persona a cambio de su protección. Por extensión, el paternalismo en una empresa, en el Estado o en una organización comunitaria, es una relación difusa que abarca otros aspectos de la vida de los subordinados, en vez de limitarse a las actividades específicas que la originan. El clientelismo que intercambia favores por votos es una forma típica de paternalismo, pero no la única. Algunos empleados, subalternos o beneficiarios están obligados a ignorar delitos, inmoralidades, abusos, descuidos, arbitrariedades o incluso usos ineficientes de recursos. En otros casos, hay empleados que deben abstenerse de llevar adelante tareas que disgusten a sus superiores, y beneficiarios deben adecuar sus acciones a los deseos de agentes estatales que ejecutan recursos públicos o los de voluntarios de organizaciones comunitarias, aun cuando no guarden relación con los motivos que dieron lugar a la relación o hasta en casos en que se trata del cumplimiento de una obligación legal.

En este sentido, así como en algunas empresas la conducta de los dueños o gerentes resulta abiertamente arbitraria en el uso de los recursos y por lo tanto irresponsable para su continuidad, también ocurre que se utilizan recursos de las instituciones como bienes de libre disposición por parte de los superiores, procurando además evitar el contacto con otras organizaciones con un interés similar o complementario. En lunfardo, esto se llama "no pisar el poncho al otro". De esta forma se eliminan buena parte de las oportunidades de cooperar con otras instituciones, basándose en cálculos mezquinos que excluyen un uso racional de los recursos, considerando a cada institución pública u organización como coto de caza de sus integrantes. Por ejemplo, es común que la información relevada por un organismo público no esté fácilmente disponible para otros organismos, o que deliberadamente se la oculte a otras instituciones, aun cuando sean también estatales. En un sentido más amplio, existe una tendencia a practicar el juego del poder preservando posiciones a través de la exclusividad de las competencias. La cooperación no es sólo una muestra de grandeza, sino también una obligación, en la medida en que permite mayor racionalidad en el uso de los escasos recursos estatales.

En estos como en otros casos similares, se han reseñado conductas comúnmente toleradas, pero que en el contexto de los organismos estatales no sólo provocan un daño a los recursos de la comunidad, sino que además limitan la capacidad de acción de las instituciones que deberían fortalecerla y transformarla. Pero la actitud crítica cotidiana ha desarrollado en la Argentina una tendencia a poner rótulos a los grupos y a aplicarle las categorías de cada rótulo a todos sus miembros. No todos los inmigrantes indocumentados son violentos, ni todos los que viven en villas de emergencia son ladrones, ni todos los políticos son corruptos, ni todos los policías organizan bandas delictivas o atentados terroristas, ni todos los médicos lucran mandando a hacer estudios innecesarios o a comprar remedios más caros. En cada región y en cada profesión existen normas morales, pero algunas de ellas tienden a considerar aceptables acciones que otros juzgan inaceptables. Esto no quiere decir que todos sus integrantes las hagan, sino más bien que al tolerarlas permiten que sigan existiendo. Pero en la vida social como en la moral profesional, la tendencia a aplicar rótulos termina siendo un obstáculo principal para la integración social. En primer lugar, generalmente al hacerlo se está cometiendo una falacia ecológica, es decir, se está cometiendo un error lógico al pretender que los individuos tienen las características de los grupos que componen. Por ejemplo, sería una falacia afirmar que una persona que vive en una sociedad violenta es necesariamente una persona violenta. Tampoco es cierto que un grupo es corrupto si está integrado por más personas corruptas que otro grupo. Obviamente, la responsabilidad de todo ciudadano es tratar de evitar que otros cometan delitos y denunciarlos cuando le consta que han sido cometidos y tiene una razonable expectativa de que puedan producirse elementos fehacientes para probarlo. Pero no es razonable esperar que todos los empleados públicos, de cualquier inserción profesional, se dediquen a investigar delitos en la administración pública, como también sería fútil suponer que todos los periodistas deben dedicarse a descubrir cuáles de sus colegas son corruptos, o que todos los médicos se dediquen a curiosear qué otros profesionales están cometiendo delitos o faltas éticas. No es que no puedan modificarse esas morales contextuales, sino que más bien se deben promover

políticas que aspiren a modificarlas sin suponer que todo se resuelve linchando a los culpables.

Pero, además, no todas las causas de las limitaciones del Estado residen en sus propias características estructurales y en los valores que orientan el accionar de sus agentes. Ya se ha hecho referencia a la dificultad para construir acuerdos en un marco de deslegitimación de los poderes públicos. A ello habría que agregar que los procesos de concertación en el nivel nacional o provincial también encuentran obstáculos por la presencia de posiciones corporativas irreductibles en algunos de los actores convocados. También, la mayor parte de las iniciativas de concertación en el nivel local suelen perder eficacia al carecer las autoridades de capacidad para agrupar y comprometer a sectores sociales que se consideran fuera del problema que provoca la convocatoria.

El incremento de la incertidumbre y la crisis de la imagen del futuro a la que se ha hecho referencia al inicio de este capítulo están relacionadas indisolublemente con la valorización del papel del Estado. Queda claro que, si bien muchas normas deben ser reformadas, no toda la crisis de representación debe ser atribuida al comportamiento de los representantes. Existe un vacío en el centro de la comunidad por el que no hay institución ni persona que pueda dar cuenta de la totalidad. La cultura que fragmenta los espacios de acción pública para resolverlos mejor provoca buena parte de este vacío. Otra parte es generada por la cultura narcisista que ha postulado, como lo califica Gilles Lipovetsky, un “desierto paradójico, sin catástrofe, sin tragedia ni vértigo”. Si bien la tragedia nunca se ha retirado, ha recrudecido o renacido en numerosos sectores, lo cierto es que las instituciones mantienen una inercia de una época reciente en que aumentó fuertemente la indiferencia para los temas públicos. Allí se ha instaurado una cultura institucional que ha procurado disolver la filosofía política en técnicas de gestión. Es notable que la mayor parte de las propuestas de acción pública que hoy se realizan no puedan dejar de tener en cuenta como referencia obligada – aunque más no sea para criticar las decisiones que allí se tomaron – al breve período de crecimiento económico de la pasada década. El crecimiento facilita las cosas, pero no puede reemplazar la voluntad política. El representante más preparado y mejor intencionado no puede resolver lo que está

más allá de los objetivos del Estado. El vacío no puede ser llenado si los partidos políticos no formulan estrategias que permitan alcanzar una integración social como objetivo final. Como afirma Castel, se necesita recuperar al Estado como “actor central que conduzca estas estrategias, obligue a los participantes a aceptar objetivos razonables y vele por el respeto de los compromisos”.

Si es absurdo pretender que la solución para la integración social es una sola –y mágica, porque no requiere ninguna elección costosa–, también lo es suponer que todos los males resultan de la culpa de sólo un grupo reducido de personas. No discriminar causas, no querer comprender las estructuras antes de transformarlas, suponer que todo se resuelve cuando se deposita la confianza en un buen técnico con las mejores intenciones, son ejemplos de una actitud que no quiere discriminar y asumir responsabilidades. Por eso, el “que se vayan todos” es el lema de la inocencia interrumpida –cuando no el del cálculo interesado de quienes estiman que en las próximas elecciones recibirán un mayor porcentaje de votos. Pretensión que se completa a veces con un rechazo contra toda la sociedad argentina: “que se vayan todos, o me voy yo”.

## Un debate mal planteado

De ninguna manera estas páginas han pretendido conformar un inventario de causas de la crisis, sino más bien demostrar hasta qué punto el debate actual está mal planteado. En gran medida, los problemas descritos no tienen que ver con el neoliberalismo ni con la depresión económica, y en muchos casos no implican delitos de corrupción. La crisis que hoy se percibe no es simplemente la muerte anunciada de un grupo de políticos. Pero para que lo sea de una forma de hacer política, debe comprenderse que no se trata únicamente de mejorar a las personas, sino de modificar las estructuras y los valores, afectando a quienes quieren participar en política y también a los ciudadanos comunes. Pero reformar la política es imposible sin transformar la sociedad, a menos que se intente mantener las reglas actuales, reeditando lo que Guillermo O’Donnell llamó “el juego imposible”, refiriéndose a la imposible conformación de una democracia entre 1955 y 1966 en la Ar-

gentina con la proscripción del peronismo. De la misma manera, las actuales reglas de la práctica política y de la demanda de los principales medios de comunicación llevarán a hacer de la democracia un juego imposible, en el cual la búsqueda de alternativas de transformación de las estructuras sociales se verá paralizada por la sistemática imputación de culpabilidad hacia quienes deberían formularlas, y la misma parálisis será la principal prueba de la culpa imputada.

A la vez, el dilema no va a poder resolverse mediante un fortalecimiento de las actuales tendencias a diseñar programas especializados o de última generación que recuperen la legitimidad de las instituciones del Estado. Lo más importante es preguntarse para qué debe relegitimarse el Estado y la acción política. Como sostiene Hopenhayn, si se acepta que la crisis actual es sociocultural, no puede esperarse “que se resuelva por vía de paquetes técnicos ni por obra del voluntarismo político”. Es decir, si el problema es de toda una cultura que ha sido internalizada en buena parte de la sociedad, no podrá resolverse mediante una elite de tecnócratas ni a través del consenso en la honradez de un líder carismático que discipline a toda la sociedad argentina. Cuando la política no sirve para debatir, elegir y ejecutar un proyecto, sólo queda la mera administración de la crisis: las políticas de asistencia, de seguridad y de adaptación de las presiones de los organismos internacionales a las limitaciones que pueda llegar a interponer una sociedad cada vez más desintegrada.

Por ello, este Informe se ha centrado en el desarrollo de un concepto que engloba las características del malestar actual: la integración social. Esto implica incorporar al análisis más dimensiones que las que predominantemente son tomadas

en cuenta en la actualidad, lo que constituyó uno de los objetivos principales de este capítulo.

El otro objetivo fue demostrar que la integración social es un proceso en el cual resultan determinantes las decisiones y las prioridades de la comunidad. Porque, al fin y al cabo, las políticas del Estado reflejan las demandas que la sociedad ha sabido hacer escuchar en forma clara. El supuesto sobre el que están trabajando todas las usinas de significado es que la sociedad se separa entre las personas integradas y los excluidos. Los problemas de éstos sirven para demostrar que aquéllos son los que viven en la situación digna y correcta. Pero, en una sociedad que excluye, todos son potencialmente excluidos, y la prueba está en que muchos hoy pueden ver que su situación económica se derrumbó por el mismo orden social en el que antes progresaban mientras otros caían en la pobreza. A diferencia del poema de Bernárdez, en el cual “lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado”, es absurdo suponer que una sociedad puede separar drásticamente una copa de la raíz. Sin embargo, muchos argentinos piensan y actúan como si eso fuera posible.

La absurda pretensión de tener siempre en claro quiénes son los malos, como en las películas, lleva a muchas personas a pretender preservar su pureza analizando actitudes personales sin querer transformar las causas estructurales de la marginación de millones de personas, que por otra parte son imaginadas como si procedieran de otro planeta. No es fácil de entender entonces cómo siendo todos tan buenos existe tanto odio, ni por qué la gente buena tiene que vivir encerrada entre rejas y puertas blindadas, bajando los seguros al llegar a cada semáforo, preguntándose cada día si no resulta más razonable mudarse a un país más desarrollado, adonde el horror no pueda llegar.

## ARGENTINOS EN EL EXTERIOR. BASES PARA UNA NUEVA POLÍTICA DE POBLACIÓN Y MIGRACIONES

*Dirección Nacional de Investigaciones, Políticas y  
Desarrollo Demográfico  
Subsecretaría de Interior. Ministerio  
del Interior de la Nación*

Tradicionalmente hemos tendido a pensar a la Argentina como un país receptor de migrantes. Luego de casi dos siglos de existencia como Nación independiente constituye una opinión de sentido común afirmar que la inmigración, proveniente de países de ultramar primero, y de países limítrofes después, se constituyó en un elemento fundante y caracterizador de la sociedad y la cultura argentinas.

A lo largo de las diferentes etapas que reconoció el fenómeno inmigratorio, el Estado Nacional definió y ejecutó políticas y programas diferenciales para cada una de ellas y, lo que resulta más importante, fue construyendo una particular estructura institucional dirigida, fundamentalmente, a la promoción, la recepción y la integración de los inmigrantes.

Sin embargo, en los últimos años las corrientes migratorias cambiaron. En la actualidad, es posible observar el crecimiento de dos fenómenos demográficos inéditos: el retorno a sus países de origen de extranjeros residentes en la Argentina y la emigración de nacionales hacia diferentes países.

Sobre esto último, el Estado nacional posee información fragmentada e incompleta. Y sobre este vacío se han construido diversas versiones e interpretaciones en la opinión pública, que no solamente afectan las decisiones de los potenciales migrantes, sino que también le restan capacidad al propio

Estado para generar las respuestas políticas e institucionales que el fenómeno requiere.

Podemos suponer razones que den cuenta de las causas, las características y de los efectos de la emigración de argentinos; pero la necesidad de información objetiva resulta imprescindible para encarar con éxito las nuevas necesidades que la gobernabilidad del tema plantea.

En función de diferentes estimaciones no oficiales, se calculaba que hasta el año 2000 alrededor de 500.000 argentinos vivían en el exterior. Durante la década de 1990, cada año cerca de 5.000 argentinos emigraban del país. Sin embargo, de acuerdo solamente a los registros de entrada y salida de Ezeiza durante el 2000 y el 2001, ese saldo negativo superó las 70.000 personas.

En Noviembre del 2001 una consultora privada realizó un sondeo, en el que detectaba que el 2% de los argentinos habitantes en las seis principales ciudades del país habían tomado la decisión de emigrar o habían iniciado los trámites para hacerlo en los siguientes doce meses.

Es decir que, de acuerdo a dicho estudio, existía un potencial de emigración de 500.000 argentinos en el plazo de un año, proyección aún difícil de verificar, pero indicativa de la necesidad de replantear el tema. Estos estudios también afirmaban que los destinos de esta emigración eran diversos. Sin em-

bargo, Estados Unidos, España e Italia aparecían como los países preferidos.

Se trata de un fenómeno novedoso, pero también masivo. Al que el Gobierno debe atender y ser capaz de gestionar desde una política de Estado. Como toda política de estas características, ella debe apuntalarse en un consenso político y en un compromiso institucional de largo plazo y ajeno a los vaivenes partidarios. Consenso y compromiso que han de estar orientados, fundamentalmente, por dos valores básicos: la protección de los derechos humanos de los nuevos migrantes y el fortalecimiento de sus vínculos efectivos con las instituciones nacionales en el extranjero.

Para cumplir debidamente con estos valores, el Estado debe poner en marcha varias tareas urgentes, sobre todo la de informar a los potenciales migrantes acerca de las situaciones objetivas de los lugares de destino y, coincidentemente, evitar que ellos caigan en situaciones de irregularidad migratoria o sean objeto del tráfico de personas.

Para ello, es necesario generar programas y nuevos instrumentos administrativos que puedan atender los variados problemas que presenta la realidad, de no solamente aquellos argentinos que han tomado la decisión de emigrar, sino también de los que ya residen en el exterior.

Como sociedad y como Estado estamos obligados, entonces, a articular un cambio sustantivo en la formulación de las políticas poblacionales y la consiguiente reforma de las estructuras institucionales. Toda vez que las aún vigentes fueron pensadas para atender las necesidades de una realidad distinta y atendían a objetivos hoy perimidos.

Las bases para una nueva política pública que atienda la emigración de argentinos debe situarse en la generación de un cuerpo de conocimientos objetivos sobre diferentes cuestiones: las causas de la emigración, los lugares elegidos para asentarse, las características sociolaborales y educativas de los migrantes, las diferentes modalidades de emigración y una estimación de los efectos que implica para nuestra Argentina esta pérdida de recursos.

Muchas veces los argentinos que emigran se ven sometidos a prácticas de explotación laboral en los países receptores o, más dramáticamente aún, son objeto de la deleznable práctica del tráfico de personas. Es por ello que la gobernabilidad de este nuevo fenómeno implica elaborar convenios bilaterales entre nuestro país y los países de destino, centrados en el esclarecimiento del ámbito normativo que regula estas relaciones y en la

adecuada información sobre las verdaderas condiciones legales y de trabajo para los argentinos en estos últimos.

Es cierto que pocas son las tareas de corto plazo que el Estado puede realizar para repatriar a los argentinos emigrados. Tanto la dolorosa decisión de emigrar como la esperanzadora opción de repatriarse son cuestiones que pertenecen a la esfera de los derechos individuales en las que intervienen variados factores. Van más allá de una coyuntura económica desfavorable y se sitúan en el horizonte de las decisiones de largo plazo en la vida de una persona y de su familia. Sin embargo, más allá de la durabilidad de la decisión de emigrar, y en virtud del alto potencial de los recursos humanos que han partido o están por hacerlo, es necesario que el Estado nacional revitalice y cree nuevos programas que posibiliten la vinculación entre los compatriotas que viven en el exterior entre sí y con la realidad argentina.

En este punto, las políticas que adoptaron los países europeos que sufrieron las consecuencias de la emigración pueden servirnos de marco de referencia para las tareas que nos proponemos. No se trata solamente de facilitar el envío de remesas a sus familias o de agilizar la obtención de trámites.

Se trata, en un mundo globalizado que tiende a borrar las identidades y las diferencias, de seguir siendo argentinos a pesar de vivir en otro país.

En síntesis, las bases para una nueva política de población que atienda a este fenómeno deben estar orientadas a obtener, en el plazo más corto posible, los siguientes cinco objetivos:

- Producir información objetiva sobre los flujos y las características de la emigración de argentinos y de las condiciones de los potenciales emigrantes.
- Contar con una correcta evaluación del impacto y los efectos económicos, sociales y culturales que implica esta cuestión para la Argentina.
- Desarrollar propuestas y programas para el tratamiento de este fenómeno en el ámbito de convenios bilaterales y multilaterales con los países receptores.
- Difundir ampliamente la verdadera situación legal y laboral de estos últimos.
- Y, por último, poner en marcha un plan de acción que permita nuevas y más estimulantes modalidades de interrelación entre los argentinos que se fueron, los que quieren irse y los que decidieron, a pesar de todo, quedarse.

## MUCHOS DIAGNÓSTICOS Y POCAS DECISIONES

Jorgelina Aglamisis

Profesora y Secretaria Académica de Relaciones del Trabajo  
Facultad de Ciencias Sociales -UBA

Los argentinos estamos sumidos desde hace largo tiempo en un proceso interminable de formulación de diagnósticos que dan por resultado nuevos diagnósticos y ninguna decisión. O al menos ninguna decisión derivada del diagnóstico. Y esto ocurre en todos los ámbitos: desde los despachos de gobierno hasta empresas e instituciones.

Los temas objeto de tales diagnósticos son variados y los enfoques múltiples, pero quizá el ejemplo más elocuente lo constituyen las informaciones referidas a la pobreza. A partir de las cifras oficiales, se vuelven a contar los pobres. Todos sabemos que hay pobreza. Mas parece que no alcanza con saberlo. Se realiza un ejercicio sostenido para determinar cuántos nuevos pobres hay por hora, día, minuto y segundo.

¿De qué se trata en realidad? ¿De un ritual obsesivo y compulsivo?

Es como si a un enfermo, de cuya enfermedad no caben dudas, se le tomara la fiebre constantemente.

Estos procesos de supuestas generaciones de diagnósticos generan costos, entre los cuales los de naturaleza económica no son los únicos ni los más significativos; lo que cuenta es que ubican la energía en un nivel inapropiado. Funcionarios, comunicadores, académicos, cuentan y vuelven a contar.

A renglón seguido, y particularmente en épocas de ilusorias vacas gordas, se invitaba, costos

mediante, a supuestos expertos de distintas latitudes para que nos enseñaran cómo habían logrado sus éxitos. Aquí la preocupación se centra en el procedimiento: hay una manera correcta de hacer y de lo que se trata es de aprenderla.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ha ocurrido y sigue ocurriendo? ¿Por qué se reiteran comportamientos habida cuenta de su inoperancia a lo largo de los años? ¿Por qué se reemplaza la acción por los simulacros de acción? ¿Es que debemos dudar de la inteligencia elemental de quienes tienen a su cargo la tarea de conducir?

En verdad tendemos a creer que existen razones de distinto orden que dan cuenta de este proceso:

- *La convicción de las dirigencias de que nada distinto se puede hacer.* Es ésta a mi juicio, la principal victoria del llamado “pensamiento único”. Esto es, se ha renunciado, de manera consciente o no, a pensar la posibilidad de un país integrado, y, desde luego, se ha renunciado a la posibilidad de ser nación. Distintas respuestas han ido emergiendo a lo largo de los últimos años: la inexorabilidad de la globalización, la brecha tecnológica, la convicción de que éste es un problema que afecta a todos los países de la región y el mundo, son sólo algunas de ellas.
- Existe al mismo tiempo *la convicción de que lo bueno, lo distinto, lo emulable, están en*

*otro lado* (¿será ésta acaso una rémora de nuestra historia de hijos de inmigrantes que venían a hacer la América pero seguían idealizando la tierra lejana?).

- *Si lo bueno y lo deseable están en otro lugar, ergo, no están aquí, entre nosotros.* Esta afirmación es, a mi juicio, fundante de muchos comportamientos cotidianos de distinto alcance y calibre y que se producen en cascada desde los niveles más altos de decisión. A lo largo de muchos años las dirigencias se solazaron –mientras recorrían el mundo, convertibilidad mediante– en decirnos a los argentinos cuán inútiles, egoístas, ineficientes, dejados y desprolijos éramos. Éste ha sido un ejercicio de sadismo dirigencial del que nadie parece querer hacerse cargo.
- Si lo bueno está en un lugar distinto de ésta, nuestra tierra, ¿para qué apelar a la creatividad, a la capacidad de trabajo, en fin, al concurso de los argentinos? ¿Para qué crear senderos, alternativas, opciones?

Si nada más se puede hacer, de lo que se trata en el nivel micro-social es de “salvarse”. Existe un abandono de hecho de aquel viejo apotegma que rezaba que “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”. Se trata de intentar la salvación individual.

Se produce así a lo largo de la última década la división entre los exitosos y los perdedores; los que supieron “adaptarse” a los tiempos

a partir de una actitud “proactiva y positiva”. “Tú puedes” se transformó en la máxima de la época. Las técnicas de autoayuda reemplazaron así la ciencia por la voluntad. El “algo habrán hecho” aplicado durante la dictadura para referirse al destino de los desaparecidos se reformuló (no están suficientemente capacitados) para aplicarlo a los que no conseguían trabajo. “Salvarse” en lo personal y culpabilizar en lo colectivo.

Si el destino está marcado, la historia está escrita, a lo sumo se pueden generar mecanismos compensatorios, corregir los excesos (palabra ésta de connotación indiscutida) o los efectos no deseados de determinadas decisiones. En fin, sólo se puede administrar la decadencia; en una investigación presentada en 1996 decíamos que el escenario temido por la sociedad argentina estaba signado por dos notas básicas: decadencia y fragmentación.

Este modelo de pensamiento se asienta en *certezas* de todo tipo. Lo que cuenta es que la certeza tranquiliza y provee mecanismos de racionalización funcionales a la supervivencia de acciones y decisiones.

Se cristalizó así la división entre los ganadores y los perdedores. Y se administró la decadencia con la convicción de que la sociedad dual era viable; que el barrio cerrado y el intercambio social y económico con “iguales” eran garantía de la tan mentada “salvación”. Y de pronto, “inesperadamente” para muchos, el espacio público es inundado por demandas infinitas que estallan cual sinfín de fuegos artificiales. Secuestros, expresés y delitos varios muestran la precariedad de las fronteras instaladas entre exitosos y perdedores. Los dirigentes se acorralan y van

abandonando el espacio de lo público.

Hoy estamos enfrentando la des-integración como sociedad. ¿Qué se entiende por desintegración? La separación de los distintos elementos que integran las partes de un todo. Dichos elementos están hoy separados y, lo que es más grave, algunos no tienen condición de existencia para otros. Postulamos hace casi diez años *la existencia de una brecha entre dirigencias y población*. Nos referíamos a todas las dirigencias: política, empresarial, sindical, eclesiástica, medios de comunicación, académicas. Decíamos entonces que ambos términos se mueven en registros muy distintos, con prioridades diferentes, con valoraciones contrapuestas y hasta en direcciones antitéticas. Tal brecha está presente tanto en el nivel macro social como en el micro social. Una de sus notas distintivas es *la falta de credibilidad entre dirigencias y población*. Señalamos entonces que tal *falta de credibilidad era recíproca*: no sólo la población no cree en sus dirigencias, sino que éstas no creen en la población.

Tales situaciones hoy se han profundizado. La falta de credibilidad recíproca es de tal envergadura que los dirigentes están sumidos en el desprestigio y la población no es considerada como un actor protagónico. Sus expresiones y manifestaciones de todo tipo (voto reclamo, piquetes, asambleas, cacerolazos, emigración, por citar sólo las de carácter más visible) no se incluyen como datos del campo. Tampoco se consideran como potencialidades la existencia de emprendedores de todo tipo que despliegan talento y creatividad en la construcción de alternativas de algún tipo de inclusión. ¿Cómo inte-

grar entonces lo que no se considera?

*La integración supone, en primerísimo término, el reconocimiento, en la acción, de la existencia del otro.* El otro como existente, pero también como aliado y protagonista para salir de una situación dramática.

¿Qué es lo que une las partes de un todo? ¿Qué es lo que integra? La construcción de un proyecto y la posibilidad de un futuro.

Queda claro entonces que la integración no es un “dado”, sino una construcción y un resultado. *La integración es entonces una decisión política*, al igual que la des-integración.

Se puede permanecer en este ritual obsesivo de generar pseudo diagnósticos, o bien se puede adoptar y transitar otro camino: el de asumir los diagnósticos, hacerse cargo e intentar una construcción “desde el pie” incluyendo a la totalidad de actores intervinientes y generando los puentes necesarios entre la multiplicidad de demandas y actores y el proyecto.

Claro que para ello se requiere de tres elementos básicos: convicción de posibilidad, poder y coraje. Ninguno de ellos es resultado de gestiones autistas, sino que, muy por el contrario, requieren ampliar la mirada para diseñar un futuro.

Convicción, porque sólo sabiendo y sintiendo que tenemos con qué construir un proyecto, que tenemos Pueblo –decimos Pueblo y no masa; decimos pueblo y no gente–, será factible hacerlo.

Poder, porque el actual cuadro de situación es resultado de la puesta en marcha de proyectos de otros y de la falta de poder propio –explicitar la falta de poder real de las dirigencias es, además de un

ejercicio de humildad, una condición necesaria para superar la brecha existente entre las dirigencias y la población.

Coraje, porque supone la decisión de actuar en función de la emergencia y por tanto de suprimir

inequidades, simulacros y privilegios sectoriales.

Definir un rumbo para la sociedad argentina es el tema prioritario –Alain Bousquet dice: “Malraux lo ha conocido todo, lo ha visto todo, lo ha deseado todo. Pero

nada le pareció más grave o sagrado que la necesidad de un destino”.

Sólo así podremos derivar de ello los objetivos, las prioridades y la movilización colectiva de recursos para lograrlos.

## ACERCA DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

*Josefina Semillán de Dartiguelongue  
Directora Provincial de Igualdad de Oportunidades  
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires*

Plantear la problemática que se vincula con la Igualdad de Oportunidades, es aludir a una herida social estructural que permite múltiples abordajes y a una posibilidad de reparación que requiere de políticas de Estado y acciones interdisciplinarias de toda índole.

La condición humana se construye en el interjuego del *eros* y del *thanatos*. En sentido primigenio, “eros” se refiere a todas las posibilidades y expresiones del *amor*. Desde un planteo antropológico, no expresa solamente lo sexual, sino todo tipo de construcción amorosa. Desde el amor a las personas, hasta el amor a la naturaleza, a los principios, las ideas, las convicciones, los sistemas de creencias, hasta lo constitutivo originario y la Divinidad.

En sentido abarcativo, “thanatos” no se refiere solamente a la muerte en tanto tal, sino a todo proceso de destrucción. Es tanática, entre otras, la indiferencia, el tono displicente, la ironía cruel, la demagogia deconstituyente, la pretendida superioridad, la obscurencia abyecta, el desprecio cubierto de bue-

nas maneras, el hambre, la marginación.

Nacer, madurar y crecer, implica vincularse con una enorme cantidad de *oportunidades* de todo tipo. Nacer es haber accedido a la *primera y constitutiva oportunidad*. Constitutiva porque “hace ser”. Primera y posibilitadora de cualquier cosa. La vida nos es dada, en tanto tal es un *don*. Nadie se origina a sí mismo. Somos seres dados. Nos aconteció aparecer en el mundo. Somos un asombro de comienzo y un interrogante que se desplaza hacia su finalidad. Por eso es terrible que hoy, en tiempos de extendida inequidad, para algunos, el haber nacido no sea la expresión de un *don*, sino el comienzo de muchas desgracias.

El círculo antropológico que fluye entre el comienzo y el fin es aquel en el que deviene la construcción de la vida. Es aquel en el que aparecen las desigualdades. Las inequidades. Somos todos iguales en *dignidad*, por el hecho de haber aparecido a la vida con las características constitutivas de lo humano. Somos “pares” en hu-

manidad. En tanto pares, iguales en *dignidad*. Compartimos el misterio de la *unidad* y la *diversidad*. Iguales en dignidad, somos diversos y diferentes en todos los sentidos. Y esas diferencias y diversidades expresan la multifacética riqueza de las posibilidades de lo humano. La policromía de las identidades. La gama polisémica de las concreciones culturales, los estilos locales, los matices regionales, los interminables asombros de lo uno y lo diverso.

Es problemático el planteo de Igualdad de Oportunidades cuando las relaciones asimétricas tiñen definitivamente las interacciones sociales. Cuando la falta de adhesión a la ley, cuando la endeblez de las instituciones y la ausencia de credibilidad en la palabra humana son habituales, empalidece la posibilidad de relaciones simétricas, se pone en paradoja a la igualdad y la dignidad se mansilla, bajo el peso de la corrupción que quiebra la unidad y homogeniza la diversidad.

La *asimetría*, al negar el interreconocimiento de la igualdad en

la dignidad, en medio de las diversidades, instaura relaciones de dependencia. En tanto depender es: depender-de... Algunos actores sociales se posicionan en un lugar de superioridad, en tanto los otros quedan en lugar de subordinación: ordenados-debajo-de. Lo superior y lo inferior se cristalizan por la ausencia del reconocimiento *par*, de la constitución ontológica de cada actor. De lo que los hace ser.

Se está planteando aquí una cuestión ontológica.

Las relaciones asimétricas hacen perder la *horizontalidad*, típica de los vínculos simétricos. La horizontalidad es metáfora de las construcciones de la *democracia*, ya se exprese en lo estructural, como en lo personal. En tanto se pierde la relación de horizontalidad,

la relación democratizante, el plano de ubicación de los actores sociales se inclina. Y puede generar desde una leve asimetría, hasta el grado máximo de subordinación en la ausencia de reconocimiento, que se manifiesta como *verticalidad*.

De ahí que las formas de verticalismo, en la relación antropológica, conlleven fenómenos de sometimiento, de debilitamiento de la autonomía, de pérdida de la actividad crítica, en fin, de no-lugar para el gozo de la libertad que, puesta en juego democrático, respeta, da cabida a la unidad en la diferencia y estimula en creatividad.

Los interrogantes vitales nos acompañan desde el nacer hasta el morir. La condición humana y las formas de organización social han pulsado siempre *eros*

y *thanatos*. La igualdad de oportunidades, en tanto logro de las mismas, es posible que nunca se dé en términos de exactitud.

Sí, es irrenunciable el trabajo fecundo, organizado y apasionado en pos de oportunidades *suficientes* para todo aquel que ha nacido y para las formas de organización que la sociedad se dé. Oportunidades suficientes está en el ámbito de pensamiento, de concebimos en tanto seres *finitos, contingentes, imperfectos, perfectibles*.

Tan fuerte es pues, la opción por la equidad en el logro de las oportunidades y el aprovechamiento de las mismas, como la conciencia de un camino necesariamente *evolutivo, no exento de paradojas, en despliegue constante y centrado en la posibilidad de aprender*.

## LA VIDA COTIDIANA EN BAHÍA BLANCA

Nidia Burstein y Stella Maris Pérez  
Universidad Nacional del Sur

### Significado de la investigación: interés e importancia del tema y originalidad de la propuesta

En mayo de 2001 (coincidiendo con la onda de Mayo de la Encuesta Permanente de Hogares), nuestra cátedra decidió realizar una encuesta en la ciudad de Bahía Blanca que respondía a una serie de cuestiones. Por un lado, al problema pedagógico de la enseñanza de técnicas de investigación social. A esta cuestión, emi-

nentemente pedagógica, se sumaron razones de otra índole. En primer lugar, la convicción acerca de la necesidad y la posibilidad real de impulsar investigaciones sobre nuestra realidad social local, que se diferencien de los marcos teóricos de la economía e incorporen categorías y conceptos de carácter sociológico. En segundo lugar, la certeza de que existían varios procesos sociales cuya investigación no había sido realizada, y que desde la sociología podían ser develados e interpretados.

La noción de vida cotidiana fue considerada idónea, dada su

inmediatez con respecto al agente; paralela y paradójicamente, se encontraba ausente su análisis para la Ciudad de Bahía Blanca. Así, en un país plagado de economicismo en el estudio de problemas sociales, el análisis de la vida cotidiana acerca información sobre una dimensión pocas veces explorada, indicando la procedencia de las principales "interferencias" a la misma, y adelantando desde la perspectiva de cada actor problemas que son hondamente colectivos.

Se definieron como objetivos generales de nuestro trabajo el explorar las condiciones de la vida

cotidiana en la Ciudad de Bahía Blanca y describir las diferencias en la vida cotidiana entre los distintos grupos sociales de la ciudad.

En función de los objetivos mencionados, se hizo imprescindible definir qué se entiende por “vida cotidiana”. Siguiendo a Agnes Heller, se optó por definir a ésta como el “conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social”. A partir de esta definición, se delimitaron “áreas de la vida cotidiana”, considerando esferas y órdenes institu-

cionales definidos por Gerth y Mills para el concepto de estructura social, y los intereses específicos de nuestro proyecto. Dichas dimensiones son:

- Económico–laboral.
- Familiar–reproductiva.
- Educativa.
- Política.
- Status o clase social.

En función de respetar la conceptualización realizada por Heller, se estudió el carácter histórico de la vida cotidiana a través de la perspectiva del actor en la evaluación de su pasado, su presente y su futuro. En momentos de crisis,

la vida cotidiana se ve interferida, y el análisis de las respuestas a dicha interferencia es valioso para el estudio de cómo los individuos desarrollan estrategias para enfrentar las nuevas situaciones.

Las características exploratorias mencionadas y el hecho de que nos encontrábamos frente a un heterogéneo grupo de análisis, implicó optar por un diseño exploratorio y descriptivo mediante una técnica de recolección de datos cuantitativa: la encuesta. En total se realizaron 207 encuestas cuya distribución final por sexo, edad y nivel socioeconómico es la siguiente:

Edad	Sexo		Total
	Masculino	Femenino	
18 a 25 años	11%	23%	(36)
26 a 35 años	16%	15%	(32)
36 a 45 años	25%	29%	(56)
46 a 55 años	15%	12%	(28)
56 a 65 años	23%	10%	(34)
66 años y más	10%	10%	(21)
Total	100%	100%	(207)
	(101)	(106)	

#### Nivel Socioeconómico

ABC1	16%
C2	22%
C3	24%
D1	20%
D2 E	18%
Total	100% (207)

Según la percepción de los entrevistados, los problemas más graves de la situación actual que afectan su vida cotidiana son:

#### Problema de la vida cotidiana que más afecta la situación personal del entrevistado

Desocupación	62%
Corrupción en el gobierno	40%
Inseguridad pública, delincuencia, violencia	40%

Los porcentajes no suman cien por tratarse de una respuesta múltiple y espontánea. Subrayamos también este último aspecto, porque la pregunta tenía la intención de identificar cuáles eran los pro-

blemas (con un máximo de tres) que el actor consideraba en ese momento como más influyentes en su vida personal, y no evaluar cuál era el más importante para la población en general. Así, el 62% correspon-

diente a desocupación debe leerse como la mención espontánea del mismo en ese porcentaje de casos.

El resto de los problemas mencionados y su correspondiente frecuencia es la siguiente:

### Problema de la vida cotidiana que más afecta la situación personal del entrevistado

Estancamiento, recesión	20%
Salarios insuficientes o bajos	23%
Caída del poder adquisitivo, pobreza	13%
Carencia o poca calidad del servicio educativo	10%
Mal funcionamiento de la justicia	16%
Altos impuestos	16%
Contaminación ambiental	15%
Situación de los jubilados	11%

Carencia o poca calidad en las prestaciones del sistema de salud, trasgresión a los derechos humanos, evasión impositiva, tráfico y consumo de drogas, individualismo o falta de solidaridad y poca representatividad de los partidos políticos fueron otros problemas que aparecieron con una frecuencia menor al 10%.

Posteriormente se interrogó acerca de los hechos especiales que hayan influido en la vida cotidiana del entrevistado. Esta pregunta registraba de manera independiente el hecho mencionado en primer lugar

de manera espontánea, para luego, en forma dirigida, hacerle señalar cada acontecimiento influyente de su vida cotidiana. El hecho que se menciona con más frecuencia es el vinculado con episodios positivos relacionados con el ciclo vital (casamientos, nacimientos, etc.): 14% lo señala en forma espontánea y 27% en forma guiada.

Los que se mencionan con más frecuencia (además del antes mencionado) son el fallecimiento de familiar o allegado (16%) y la pérdida del empleo propio o de algún otro miembro del grupo familiar

(14%). En este último caso, es importante comparar que, mientras el 21% (14% y 8%) señala la pérdida de empleo como el hecho que más influyó en su vida cotidiana, sólo un 8% (4% y 3% entre espontáneas y guiadas) señala la obtención o promoción del empleo.

Para completar y profundizar el análisis económico de los estilos de vida de estos hogares, se interrogó acerca de la situación ingreso económico familiar (Nivel Económico Social, NES), en términos de “alcanza”, “alcanza y ahorra” y “no alcanza”.

Situación del ingreso	Total	NES alto	NES medio	NES bajo
No alcanza	38%	12%	32%	52%
Alcanza, pero no ahorra	41%	30%	49%	33%
Alcanza y ahorra (aunque sea poco)	21%	58%	19%	15%
Total	100%	100%	100%	100%

Como era de esperarse, las probabilidades de ahorrar aumentan a medida que asciende el nivel socioeconómico de quienes respondieron. Sin embargo, los porcentajes de personas que ahorran son muy similares en los estratos medios y bajos, haciendo suponer que en ambos casos se restringe el consumo para generar algún tipo de resguardo económico. Esta afirmación se refuerza con lo observado para los mismos estratos en las dos alternativas de respuesta anteriores: el porcentaje de respuestas “no alcanza” es un 20% mayor en los estratos bajos con res-

pecto a los medios. A la inversa, el porcentaje de “alcanza pero no ahorramos” es mayor (con la misma intensidad que en la comparación anterior) entre los sectores medios.

La dimensión educativa se evaluó en función de los siguientes ítem: a) asistencia o participación del entrevistado en alguna actividad de capacitación o perfeccionamiento en el último año –no se incluyeron las jornadas docentes obligatorias organizadas por la Provincia de Buenos Aires–; y b) percepción de la educación como facilitadora de ascenso social.

El 23% de la población mencionó haber realizado algún curso de capacitación laboral. Las mujeres son las que manifestaron en mayor medida haber recibido capacitación en el último año: de 106 mujeres encuestadas, 30 (28%) asistieron a algún curso.

Este dato se convalida al observar la relación entre la condición de ocupación y el acceso a capacitación, donde las probabilidades de acceder a la misma encuentra a las amas de casa en tercer término, luego de los ocupados y los estudiantes.

	Ocupado	Desocupado	Estudiante	Jubilado o pensionado	Ama de casa
Asistió a algún curso de capacitación	28%	8%	20%	17%	18%
No asistió a ningún curso de capacitación	72%	92%	76%	83%	82%
Total	100% (110)	100% (13)	100% (25)	100% (24)	100% (34)

En cuanto al papel que la educación juega en la posibilidad de ascenso social, las respuestas observadas lo privilegian: el 93% acuerda con que la educación es la mejor herencia que se le puede dejar a los hijos, y el 89% afirma que el acceso a la educación aumenta las posibilidades de acceder a mejores puestos de trabajo.

La observación en conjunto de las dos dimensiones trabajadas sobre educación permite comprender la importancia adjudicada a esta esfera en la vida cotidiana: la búsqueda y el acceso a mayores niveles educativos no decae a pesar del contexto de desocupación y caída general del poder adquisitivo.

Lo que se persigue en la siguiente variable es introducir el tema de la política y su influencia en la vida cotidiana, comenzando por identificar si el entrevistado considera que la misma influye o no en aquélla. Sea cual sea la respuesta, es importante detallar las causas que la justifican y la manera (en caso de una respuesta afirmativa) en que se interceptan vida cotidiana y política.

El 81% de los encuestados afirma que la política afecta su vida cotidiana. Entre las causas mencionadas la mayoría se inclina a vincular las decisiones políticas con su situación económica cotidiana:

- “Todas las obras de gobierno buenas o malas influyen social y económicamente”.
- “Porque no se gobierna bien hay mucha gente sin trabajo”.
- “Porque al haber malos gobernantes el país se va cada vez más abajo”.
- “Va en cadena, si los primeros no tienen plata, no se cobra”.
- “Por los impuestos”.
- “Al aumentar el conflicto con las obras sociales, las personas van menos a los médicos y mi esposo tiene menos trabajo”.
- “Porque los problemas bajan las ventas”.
- “Es un desastre, y a los jubilados no los toman en cuenta”.

- “Porque la política del Estado afecta directamente en mi actividad, favoreciéndome o no; depende de las decisiones”.

Otros en cambio, señalan un carácter más general de vinculación de la política con la vida cotidiana, o la relacionan con el tema de la corrupción y la falta de justicia:

- “Es duro explicar cuán equivocados están algunos políticos y cuánto mal causan a la sociedad”.
- “Porque las funciones ejercidas por los políticos están minadas por la corrupción”.
- “Gracias a la política anda todo mal”.
- “Porque dependemos de las personas que nos gobiernan”.
- “Porque uno no está seguro con los momentos vividos en el presente. El funcionamiento

de la justicia que debería tener el país no está del todo bien: hay muchos desocupados, mucha inseguridad”.

## Conclusiones y reflexión final

El espíritu con el que hicimos esta investigación fue el de observar con más detenimiento y profundidad la vida cotidiana en la Ciudad de Bahía Blanca, porque su estudio implica entender cómo las poblaciones se representan y cómo viven su realidad inmediata.

Son innumerables los hechos que afectan la vida cotidiana y que trascienden lo meramente familiar o individual. El desempleo, la corrupción y la crisis económica

son algunos de los factores más mencionados como ejemplos del accionar de la estructura sobre la vida cotidiana de los bahienses.

El accionar de dicha estructura se vivencia a través de tres niveles de condicionamientos: el ejercido por el Estado Nacional, el Provincial y el Municipal. El ejemplo de los “impuestos” es sentido como una pesada imposición, que no redundaba en beneficios colectivos.

La frase obtenida en una encuesta: “Es duro explicar cuán equivocados están algunos políticos y cuánto mal causan a la sociedad” expresa los fuertes condicionamientos que sufren las vidas individuales. Esta percepción empezaba a expresar la situación agravante del conflicto que tendría su punto culminante en Diciembre de 2001.